

**¡NO TE
PRIVES!**

**DEFENSA DE
LA CIUDADANÍA
FERNANDO
SAVATER**

1.ª edición: septiembre de 2014

© 2014, Fernando Savater

Derechos exclusivos de edición en español
reservados para todo el mundo:

© 2014: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona
Editorial Ariel es un sello editorial de Planeta, S. A.
www.ariel.es

ISBN: 978-84-344-1861-5
Depósito legal: B. 14.971 - 2014

Impreso en España por
Cayfosa

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como **papel ecológico**.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

ÍNDICE

Prólogo. Sostenerla y no enmendarla	9
Para abrir boca. Peces piloto entre tiburones	19
 Primera parte	
Ciudadanos sin remedio	
Ciudadanía fraccionada	25
Los políticos y su descrédito	31
Otra asignatura pendiente	35
Aprendiendo a empeorar	39
Indignación a la española	43
Desobediencia retrospectiva	49
Babelizando	53
La melonada	57
La lección sádica	61
Laicismo lingüístico	67
Inflación ética	71
Remedios para lo irremediable	75
Regreso a Estrasburgo	83
Tribulaciones democráticas	89
La materia prima de Europa	93
Terra mítica	97
Sugerencias postelectorales	101
La confusión reinante	105
Locos por el pueblo	111

Segunda parte

Los otros apellidos vascos

Carta a Joseba	117
El conflicto político	123
El legado de ETA	127
A vueltas con las víctimas	131
Educar con la ley	135
Ampliando el currículum	139
El silencio y los silenciados	143
Ética por los suelos	147
Faena de aliño	151
Los complacientes	155
Fuera del área	159
Marcando el paso	163
¡Y lo llaman venganza!	167
Los indeseables políticos	171
Risa floja	175
Pasar de los antepasados	177

Tercera parte

Secuestro a la catalana

Hacerse el loco	183
La normalización de Cataluña	187
Automutilación	191
Individualismo colectivo	195
Leones y bueyes	197
La selección españolista	199
Paz, vida, libertad	203
Movimiento nacional	207
Epílogo. Hacia una Europa de los ciudadanos	207
Adenda. Tras las elecciones europeas del 25 de mayo	217
Despedida.	219

PRIMERA PARTE

Ciudadanos sin remedio

Ciudadanía fraccionada

En una de sus cartas, Voltaire asegura que los humanos tenemos un número determinado de dientes, cabellos e ideas que con los años vamos perdiendo paulatinamente hasta quedar reducidos al despojado modelo que la vejez presenta al público. Puedo dar fe personal de ese desguace, pero no todos sus registros me parecen igualmente deplorables. En concreto el adelgazamiento de la provisión ideológica tiene bastante de beneficioso. La experiencia demuestra que rebosar de ideas no es señal de gran inteligencia sino más bien de lo contrario: los sabios las someten al mismo régimen que las juergas y se permiten muy pocas. A quienes no lo somos, nos viene bien que el tiempo nos desbroce de la excesiva facundia, sobre todo en lo político. A mí me ha dejado reducido al ideal socialdemócrata y poco más. Ya sé que el término les suena peyorativo y anticuado a amigos a los que intelectualmente aprecio, porque les recuerda la propaganda ineficaz o nociva de ciertos socialistas al hispánico modo, pero a mi juicio equivale al sentido común (un punto escéptico) aplicado a la gestión de lo común. Aún más, creo que se trata ni más ni menos de lo que George Orwell (a quien por cierto ahora algunos, a propósito de Snowden, confunden con Mercedes Milá) llamaba *common decency*, la decencia corriente en lo que toca a lo común.

Ahora estamos viendo que la socialdemocracia, con su combinación cívica de derechos y deberes, su énfasis en la defensa de un espacio vital y unos servicios públicos no sometidos a la mera regulación comercial y su principio de que toda riqueza es social y por tanto debe ser socialmente responsable, no es una aspiración política facilona ni aburridamente modesta como algunos han podido suponer. Aún menos, desde luego, una suerte de totalitarismo *light* que marchita o proscriba la excelencia individual. Más bien se trata del auténtico esfuerzo revolucionario de la era contemporánea, contra la que han ido creciendo obstáculos institucionales y económicos que revelan el fondo subversivo de sus aparentemente sosegadas propuestas. Lo que parecía un ideal domesticado se ha convertido por la zapa de intereses reaccionarios en casi una utopía. En efecto, la socialdemocracia nunca ha pedido el sol a media noche, sino una red de alumbrado público eficaz cuando se pone oscuro. Eso la enfrenta por igual a quienes claman que debemos resignarnos a las tinieblas pues son naturales (salvo para los héroes capaces de conseguir su propia linterna) y a los que recomiendan apedrear las pocas farolas que pueda haber y exigir el amanecer ya o nada.

En el fondo, los movimientos ciudadanos como el 15-M y derivados, aunque peraltados en ocasiones por declamaciones radicales de hoja caduca (véase el párrafo primero de este artículo), lo que coinciden en exigir es la recuperación de los puntos perdidos o jibarizados del ideario socialdemócrata. Zarandeados por una crisis que exige reformas de calado pero también se presta a servir de coartada a retrocesos anti-igualitarios, los más adormecidos han cobrado conciencia de que el llamado Estado del bienestar no tiene piloto automático y que nada socialmente bueno está garantizado para

siempre si sus beneficiarios no quieren o no saben empeñarse políticamente en conservarlo y actualizarlo. Se nos ha dicho que no sólo los ciudadanos de a pie padecen la tormenta actual sino también grandes inversores, entidades bancarias y hasta gobiernos, nacionales o regionales, para cuya recuperación debemos consentir en sacrificios... por nuestro bien. Pero aunque puede que, lo queramos o no, los problemas de los poderosos sean nuestros problemas, «lo que es seguro es que sus soluciones no son nuestras soluciones». Tomo la cita del muy sugestivo y didáctico libro que ha dedicado Félix Ovejero a la teoría de la democracia a partir del 15-M: *¿Idiotas o ciudadanos?* (Editorial Montesinos, 2013). Un oportuno prontuario de cómo mantener y poner al día las reivindicaciones de la socialdemocracia en la estación poco propicia, sin abandonismo resignado ni auto-complacencia.

A mi juicio, lo primero que hay que recobrar es la dimensión política de cada uno y todos en la palestra democrática. Ser político en el sentido auténtico del término, no en el insultante y pueril, es preferir enmendar errores a linchar culpables. Para ello no basta con tener claros los legítimos intereses particulares sino buscar la forma de encuadrarlos y defenderlos en el conjunto de todos los afanes sociales, que también debemos considerar como propios para no fraccionar nuestra ciudadanía. Una de las exigencias más repetidas, sea con honesto fervor o por rutina demagógica, es que los políticos que ocupan cargos representativos deben salir de sus despachos y acercarse más a los problemas de la gente; pero, puesto que esa gente también está formada por políticos y no por idiotas aislados en sus reclamaciones, no menos oportuno sería que cada cual intentase imaginarse en el despacho del representante de turno, teniendo que armonizar

demandas y urgencias contrapuestas. No vale monopolizar en provecho propio, aun legítimo, la voz del pueblo, porque ésta rara vez suena con la unanimidad del orfeón. «La argumentación pública obliga a mostrar que, en algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente aceptables, de interés general, y con la realidad del mundo» (F. Ovejero, *op. cit.*).

En España, el peor sabotaje al uso racional de la ciudadanía es el separatismo bravo o manso que se ha generalizado. Este último, el separatismo de los no separatistas, es el más extendido y por tanto el más dañino. Esa buena gente que sólo se siente unida al resto de sus compatriotas cuando hay un accidente trágico o un triunfo deportivo, nunca en la gestión política. En las peores épocas del terrorismo, oíamos decir a gente bienintencionada (creo yo): «Eso es algo que tenéis que resolver los propios vascos». Y hoy se discute si el derecho a decidir en Cataluña es legal o ilegal, pero pocos mencionan que excluye antidemocráticamente de la decisión al resto de los españoles de cuyo país forma parte Cataluña. Es el patriotismo de la vaca que ríe: cada región una porción separada envuelta en su papel de plata, que comparten la misma cajita pero se comen por separado. Y eso en el mejor de los casos... Defender los derechos de lo común a todos (por ejemplo, la lengua y el derecho a ser educados en ella) es una agresión a idiosincrasias sacrosantas, a veces de cuño reciente. El lenguaje políticamente correcto decreta que «euskaldunizar», «catalanizar» o «descentralizar» pueden llevar a abusos, pero son términos aceptables; en cambio «españolizar» o «recentralizar» son voces reaccionarias en sí mismas, incluso fascistas. Los políticos antiseparatistas, si quieren ser gente *progre*, serán vasquistas, catalanistas o galleguistas y proclamarán que ya no tiene sentido

reivindicar la nacionalidad estatal, pasada de moda. Y ni siquiera se puede culpar de este fraccionamiento a los nacionalistas, lo mismo que no llamamos «ladrón» a quien entra en una casa de puertas abiertas y se lleva algo precioso que nadie protege ni reclama como suyo. ¡Qué difícil es que los ciudadanos puedan luchar eficazmente por actualizar el proyecto socialdemócrata en estas condiciones!

Los políticos y su descrédito

Cuando un tópico se convierte en moda y tenemos que aguantarlo repetido desde la izquierda y la derecha, por jóvenes y menos jóvenes, no es difícil adivinar que encubre alguna forma de pereza intelectual: el conocimiento realmente significativo nunca goza de tantas adhesiones. Uno de esos lugares comunes populares y vacuos es hoy el que proclama el descrédito de los políticos. Los políticos son torpes, venales, perniciosos y por tanto culpables de los padecimientos de la ciudadanía en crisis. Se habla de ellos en el mismo tono altanero y fastidiado con que antaño las señoras de la alta sociedad se referían al servicio: «¡Qué tiempos! ¡No hay forma de encontrar criadas como las de nuestras madres!».

Pero aquellas señoronas quejosas tenían claro que ellas desde luego no formaban parte de la grey servil, opinión clasista aunque demostrable. Los denostadores actuales de los políticos parecen también creer que ellos son de una clase diferente, más digna y pura que la de los criticados, de quienes son víctimas inocentes. En lo cual se equivocan. En un sistema democrático todos somos políticos en ejercicio, aunque la estructura institucional haga que unos cuantos sean elegidos para representar a sus votantes en determinados cargos, transitoriamente. Por decirlo contundentemente, los que mandan son nuestros mandados, aquellos a quienes no-

sotros les hemos mandado mandar. Si cumplen mal la función para la que fueron designados, tampoco quienes les hemos elegido nos hemos lucido como políticos. Tendremos que asumir nuestra parte de culpa, revocar su nombramiento optando por otros o incluso ofrecernos para sustituirlos, si creemos poder hacerlo mejor.

Hace unos cuantos días unos pocos miles de manifestantes cercaron el Congreso en Madrid, esperando según sus convocantes hacer dimitir al Gobierno y plantear una nueva Constitución. ¡Ni más ni menos! Tan comprensible es que muchos ciudadanos expresen su descontento ante las medidas de austeridad gubernamentales como impertinente la pretensión de tres o cuatro mil personas de convertirse en la totalidad verdadera del pueblo español. Nada nos obliga a creer que quienes se manifestaban en torno al Congreso fuesen más lúcidos, ni más honrados, ni conocieran mejor la solución para los problemas de la crisis que los que estaban reunidos dentro. Más bien lo contrario, si nos fiamos de sus lemas y de la empanada mental de los medios digitales que les apoyan. Su presión en la calle no sólo pretendía desautorizar a los parlamentarios, lo cual ya es abusivo, sino también a los millones de votantes que les habían elegido, quizá equivocándose al hacerlo aunque en el legítimo ejercicio de su voluntad democrática. La protesta contra las decisiones del Gobierno es un derecho indiscutible (mientras sea pacífico) y ampliamente ejercido ya en muchas ocasiones, pero intentar derogar con una algarada las instituciones de las que depende el funcionamiento del Estado resulta perfectamente inadmisibile.

Los políticos electos no son una casta aparte, ni mejor ni peor que los políticos electores. En democracia, cualquier crítica a los gobernantes es en realidad una autocrítica de

los ciudadanos. Seguramente imprescindible, porque hay muchos mecanismos institucionales que deberían sufrir transformaciones en vista de su mal funcionamiento. Pero sin buscar chivos expiatorios en el Parlamento ni la absolución demagógica del resto de la población.

Otra asignatura pendiente

Me parece muy bien que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya preparado un dossier titulado «Por la convivencia democrática», destinado a facilitar a nuestras sedes diplomáticas un argumentario que sirva como réplica a la activa, si bien no demasiado fructuosa, propaganda del nacionalismo catalán en Europa. Es un trabajo que puede resultar sin duda útil. Pero ante su mismo título o el de algunos de sus apartados («Sobre la lealtad a los ciudadanos y a las instituciones», «Por la concordia frente a la voluntad de no convivir: exigencias de la ética cívica», etc...), me pregunto si ahora el Gobierno no estará por fin echando de menos la asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha eliminado del bachillerato para complacer a la clerigonza más reaccionaria. Claro que tampoco resultan más fiables quienes como los socialistas la reclamaron indignados para luego demostrar diariamente en Cataluña o el País Vasco que no la han estudiado muy a fondo. A no ser que sea una sutil estrategia para ejemplarizar los estragos que causa su ausencia...

Más allá de los argumentos históricos o económicos que el informe aporta frente al nacionalismo catalán, quienes padecemos la enfermedad filosófica echamos de menos la elucidación de la cuestión de fondo: en qué consiste la ciu-

dadanía misma. Porque desespera ver que en la disputa actual los protagonistas siguen siendo Cataluña, Andalucía, Euskadi y demás territorios, con sus agravios o exigencias, pero nunca los ciudadanos con los derechos y deberes que los configuran como tales. Es la confusión entre *pertenencia* (prepolítica, acrítica, sentimental e intelectualmente irrefutable) y la *participación*, basada en derechos y leyes, en acuerdos institucionales y en la deliberación de cada cual. O si prefieren entre «identidad», que es una construcción esencialista a base de rasgos culturales o folclóricos, y «ciudadanía», que es la titularidad del ejercicio democrático moderno para la que no cuentan particularismos previos religiosos, raciales o regionales.

Lo aclara muy bien un filósofo, el profesor Ramón Rodríguez, en su artículo «¿Justicia o privilegio?» (*El Confidencial*, 9 de febrero de 2014): «Se es sujeto de derechos precisamente como un cualquiera, como un “don Nadie”, por eso la justicia ha de ser ciega y por eso la ley es igual para todos. Pero el resultado inevitable al que tiende la política nacionalista de la identidad es a introducir diferencias en ese nivel básico de la ciudadanía, haciendo que la identidad actúe como un filtro de la condición ciudadana, que establece condiciones y aporta beneficios en virtud de la pertenencia a ella». Por eso el imprescindible laicismo democrático no consiste sólo en separar al Estado de las iglesias, sino en desligar a la ciudadanía de todo condicionamiento prepolítico (para que nuestra Constitución fuese realmente laica deberían suprimirse los «derechos históricos», algo que no suelen proponer la mayoría de quienes piden reformarla). Y ello no para abolir las diferencias identitarias, sino para que cada ciudadano pueda fraguarse su propia identidad única como dese dentro de leyes compartidas que no reconocen

ninguna como condicionamiento político. Me temo que esto se entiende tan mal en Europa como en España, por eso seguimos tan lejos de conseguir una ciudadanía europea. Y de que pueda haber efectivamente una justicia universal, para qué voy a contarles.